

LA GOBERNANZA POLÍTICA DESPUÉS DEL COVID-19

Carmen Lumbierres Subías

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED.

Presidenta del Observatorio de la Comunicación Social en Aragón

El modelo de gobernanza que se ha impuesto en el ámbito público a semejanza del ya conocido en el ámbito privado y empresarial, como sucedió antes con el modelo gerencial, debe contar con un requisito previo que se ha cumplido con grandes dificultades en este país en los últimos años, la gobernabilidad política.

La realidad pre COVID estuvo marcada por la interinidad y la incertidumbre, con cuatro elecciones generales en cuatro años, 2015, 2016, abril y noviembre 2019. Con un periodo de 316 días de gobierno en funciones en el año 2016, y de 254 días en 2019. Procesos de negociación largos e infructuosos como los cuatro meses de negociaciones del PP con Ciudadanos para investir presidente a Mariano Rajoy, las primeras negociaciones Podemos- PSOE que concluyeron en una nueva cita electoral. Añadir además el triunfo de una moción de censura en las Cortes Generales por primera vez en nuestra reciente recuperación democrática y la imposibilidad del gobierno surgido de la misma para conseguir la aprobación de unos presupuestos generales.

Esta espiral de inestabilidad pareció detenerse dos meses antes de la irrupción de la pandemia con el nuevo gobierno de coalición, pero con una polarización del espectro político, que no venía más que a confirmar que el cambio de sistema de partidos de nuestro país, no había desembocado en un continuum más pluralista sino en un modelo bibloquista al que se le sumaban las opciones políticas periféricas, cada vez más numerosas.

Era el inicio de una vuelta a la normalidad en el desempeño de las instituciones, olvidando en parte la adjetivación electoral de nuestra democracia, que tanto nos había marcado en el último quinquenio. Si la política democrática se basa en la celebración de elecciones a intervalos regulares, que esos plazos sean cada vez más cortos no implica mayor desempeño democrático sino mayor incapacidad para conjugar los principios de decisión, representatividad y gobierno.

El inmediato futuro debe romper con este modelo competitivo y volver a la política colaborativa. La confrontación, aún siendo imprescindible debe dejar espacio a la concurrencia deliberativa, más necesaria que nunca en una situación de riesgo global. La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto los grandes retos de nuestro sistema socioeconómico y la complejidad que deriva de sus interrelaciones. Claros ejemplos de ello son la dicotomía entre la salud y la economía, la libertad y la seguridad o la globalización frente a la renacionalización.

Las respuestas sistémicas deben basarse en la coordinación, con el impulso de modelos de gobernanza multiagente y de descentralización territorial, uno de los déficits funcionales destapados durante la gestión de la crisis sanitaria.

Uno de nuestros hándicaps para la gobernanza multinivel es que partimos con un modelo desigual, mientras la política nacional está enfrascada en esa estrategia polarizada y de confrontación, las autonómicas y locales han sido capaces de seguir desenvolviéndose

con normalidad (formar gobiernos, aprueba presupuestos). Todas las partes del sistema deben funcionar primero aisladamente para hacerlo en su conjunto.

Conjugar la planificación a corto (respuestas a incidencias de futuras crisis) con el largo plazo (reforma de modelo productivo, atención sanitaria, digitalización e innovación tecnológica) se revela como la pauta de los tiempos de gestión para los que se necesita cierta unidad de acción política imprescindible para incorporar a la sociedad civil organizada y al mercado, véase la imprescindible concertación social. Flexibilidad, pero con un proyecto determinado y finalista.

Antes los tres grandes actores que promovían desarrollo, innovación, aprendizaje y bienestar (Estado, mercado y sociedad civil organizada) residían en departamentos excesivamente estancos y recelosos. Los problemas del presente son complejos y no entienden de departamentos estancos. Un sistema de gobernanza más engrasado y refinado es probablemente el único posible (más confianza, menos prejuicios ideológicos, menos modelos simplistas, más colaboración público-privada)

Pero nos encontramos con una peligrosa asimetría: la debilidad de la política y del Estado, y el empoderamiento del mercado y de la sociedad civil. Necesitamos la recuperación de la fuerza del Estado. No más Estado, sino mejor Estado, con administraciones más fluidas que atraigan el talento y recuperen algunas pocas competencias estratégicas, mayor calidad del liderazgo político de las instituciones, que es el reto más complejo. Y mayor transparencia y capacidad de control social y democrático de las instituciones.

Estos problemas no son nuevos, la pandemia como en otros asuntos, los ha acelerado, y la revisión de estos debe hacerse lejos del dogmatismo de unos que no creen en la capacidad del sector público para evolucionar y de otros que lo contemplan como si fuera un sector superior e infalible.

Nos enfrentamos a un entorno de cambio y disrupción tecnológica que obliga a gestionar la innovación, y que requiere se haga de forma transparente y abierta al escrutinio social. Al mismo tiempo, esta orientación innovadora exige centrar el interés en los verdaderos problemas sociales y económicos, en la implementación de estas políticas públicas respuesta de las crecientes demandas que obligan a la Administración a desarrollar mejores procesos de evaluación de los impactos (Ingreso Mínimo Vital, ERTE's, gestión de los proyectos financiados el fondo europeo de reconstrucción). Hay que construir organismos evaluadores profesionales y abrirse al escrutinio social para recuperar la confianza en la gestión política.

En el reto que abordamos, se hace necesario que el sector público desempeñe un papel estratégico, pero modificando los modelos autosuficientes y verticales porque la creación de valor público es una tarea cada vez más colaborativa. Requiere el uso de modalidades de gestión de servicios adecuados a cada caso, con medios internos o externos. Implica el trabajo en red y la apertura a la supervisión y creación de servicios con la sociedad civil.